

Diálogos ecologistas 2024

LA ECONOMÍA DE CARBONO: CRÉDITOS DE CARBONO, IRREGULARIDADES E IMPACTO SOCIAL

Andrea Echeverri, Jutta Kill,
Larry Lohmann, Camila Moreno,
Ivonne Yáñez, Emiliana Reinoso

Resumen: Se tiende a denominar como economías criminales a aquellas vinculadas al narcotráfico o al tráfico de personas entre otras, sin embargo, existen también otro tipo de crímenes como algunos relacionados a la “economía verde”. La economía del carbono forma parte de estos. Las compensaciones de carbono se imponen en las comunidades en ocasiones con extrema violencia, con desalojos, hay fraudes que las sostienen y están en conexión con actividades ilegítimas e ilegales. En este artículo se explorará la relación entre la economía del carbono, la criminalidad, y la violencia en los territorios.

Palabras clave: criminalidad, crimen, economía verde, economía del carbono, mercados de carbono, compensaciones de carbono, endeudamiento, extractivismo, neoliberalismo, violencia, incendios forestales, cambio climático.

3. LA ECONOMÍA DEL CARBONO

vs. Territorios, Pueblos,
Nacionalidades y Naturaleza

26 DE SEPT

10:00



A. Echeverry: Global Forest Coalition, Colombia. andreae68@gmail.com
J. Kill: World Rainforest Movement, Alemania. jutta@wrm.org.uy
L. Lohmann: The Corner House, Inglaterra. larrylohmann@gn.apc.org
C. Moreno: Investigadora, Brasil. cc_moreno@yahoo.com
I. Yáñez: Acción Ecológica. Ecuador. ivonney@accionecologica.org
E. Reinoso. College of the Atlantic Student. Chile. ereinoso24@coa.edu

Introducción

Este artículo recoge las principales ideas presentadas en el panel “La economía de carbono vs territorios, pueblos, nacionalidades y naturaleza” que se llevó a cabo en septiembre de 2024 por iniciativa del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Acción Ecológica y Jubileo Sur Américas, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Técnica Salesiana. Las y los panelistas coincidieron en que el funcionamiento de la economía del carbono se podría catalogar como una economía criminal; entendiendo además que son las economías extractivistas, como la petrolera, la minería, los monocultivos, entre otras, las que facilitan el funcionamiento de la economía del carbono y vice versa.

Durante el panel se abordaron al menos cuatro temas claves. En primer lugar, se habló de qué manera la economía criminal del carbono se relaciona con otras economías criminales extractivistas y de otra índole. En segundo lugar, la influencia de la corrupción intelectual y fraudes regulatorios llevados a cabo por algunas instituciones europeas y multilaterales que permiten el funcionamiento de las economías verdes y mercados de compensaciones de carbono.

En tercer lugar, se discutieron las condiciones necesarias para el funcionamiento de las redes del mercado de carbono, y cómo se constituye el carácter ilícito de estas economías.

Para finalizar, como último tema, se habló sobre los impactos territoriales de la economía criminal del carbono y la relación entre el cambio climático y los devastadores incendios que han afectado el subcontinente sudamericano durante el 2024. Para esto se creó una analogía entre el funcionamiento de dos economías criminales: la del narcotráfico y la del carbono. Se conversó también sobre las diferentes posiciones de poder que están involucradas en quienes forman parte de estas redes criminales, y de cómo algunas comunidades se ven envueltas en este tipo de economías de manera violenta que a su vez impacta negativamente a sus territorios.

La economía del carbono y otras economías extractivistas

Es imposible hablar de mercados de carbono, sin hablar de la industria extractivista; no están aislados el uno del otro. Estos conforman una red mundial que puede ser considerada como criminal en su totalidad debido al funcionamiento compuesto en muchas ocasiones de prácticas ilícitas. Esta red debe ser situada junto a las demás economías criminales de alcance global tales como la del fraude fiscal, narcotráfico, lavado de dinero, entre otras. Larry Lohmann, de The Corner House, sostiene que estas redes delictivas rondan cientos de miles de millones de dólares al año, y que los mercados de derechos de contaminación por carbono son comparables en su magnitud a otros mercados ilícitos.

Lohmann también comenta que la red de carbono va mucho más allá del mercado del carbono, y enfatiza en la relación indisoluble entre la economía de los combustibles fósiles y la economía de los derechos de contaminación por carbono.

Si se considera que la extracción continuada de combustibles fósiles es un crimen, tal como lo establece el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir^[1], entonces los mercados de carbono también deberían ser considerados como un crimen, ya que estas redes de economías criminales están conectadas entre sí y son dependientes una de las otras.

Pero, ¿cómo específicamente se relacionan el mercado de carbono y otras economías extractivistas?

Lohmann asegura que los mercados de carbono están implicados en toda la violencia, explotación, fraude y terricidio del petróleo, el carbón y el gas, porque la mano que roba territorios para extraer y procesar combustibles fósiles es la misma mano que roba territorios para producir supuestas compensaciones a los efectos nocivos que la extracción de combustibles fósiles genera.

Los grandes usuarios y extractores de combustibles fósiles son los mismos de compensaciones de carbono, y a menudo son los mismos que, directa o indirectamente, confiscan territorios en pueblos rurales, especialmente en el Sur Global, para obtener derechos de contaminación de carbono y poder continuar la extracción de combustibles fósiles.

El desarrollo de los mercados de carbono reproduce dinámicas coloniales de extractivismo y explotación a territorios que han sido históricamente vulnerados.

Sin el desarrollo de mercados de carbono, no existirían industrias petroleras contaminando territorios vulnerables a prácticas extractivistas, y vice versa. Es decir, la creación de la red de una economía de carbono tiene un origen en la explotación de recursos de países del Sur Global, y este tipo de mercados permite la reproducción de prácticas extractivistas para continuar la extracción de por ejemplo, el petróleo.

El fraude intelectual de la economía del carbono

Empresas europeas han querido posicionarse como líderes en el mercado de la regulación ambiental, y específicamente de los mercados de carbono. Jutta Kill, bióloga e investigadora con más de 25 años de experiencia en proyectos de conservación en comunidades locales y pueblos indígenas, aclara que “pensar que el problema, o el fraude, que implica la compensación de carbono se debe a una falta de regulación es no entender qué es la compensación de carbono.”

En este panel, Kill comenta que las compensaciones de carbono son un instrumento financiero basado en supuestos.

La regulación del mercado de carbono no es la solución a la ilicitud de la corrupción intelectual ligada a las compensaciones de carbono. Es imposible regular la corrupción intelectual. Los desarrolladores de proyectos de carbono crean narrativas sobre el supuesto manejo por pobladores locales de sus territorios, creando un imaginario en donde los pobladores habrían descuidado su tierra, talando árboles, o inhibiendo las plantaciones. Sin embargo, este también es un supuesto que se crea en un imaginario empresarial y que se intenta reproducir en poblaciones locales.

Es corrupción intelectual que un auditor finja saber lo que habría sucedido en un territorio local si el proyecto de carbono no hubiera ocurrido. A partir de esta hipótesis improbable, surge una manipulación, fraude y criminalidad, permitiendo así que la narrativa de las compensaciones de carbono permitan la continua extracción de petróleo en territorios del Sur Global. Porque no se puede hablar de carbono sin hablar de petróleo.

En el contexto europeo, existen muchos escándalos por el mercado de las compensaciones de carbono, unos más visibles que otros. Un ejemplo infame es el fraude del carrusel de carbono que comenzó a ser un problema importante en 2008, año en que el mercado de derechos de emisión de CO₂ de la Unión Europea (EU ETS) se expandió significativamente y, con él, las oportunidades para cometer fraude.

Este fraude fue un esquema de evasión fiscal en el que se explotaron las lagunas en la regulación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones intracomunitarias de derechos de emisión de carbono, causando grandes pérdidas fiscales. Uno de los criminales fue Grégory Zaoui, un estratega de este escándalo, en donde más de 5.000 millones de euros fueron robados del erario público.

La idea básica de los fraudes del carrusel es el aprovechamiento de las diferencias en el IVA entre países de la UE. ¿Cómo funcionan estos fraudes? Primero, su empresa importa mercancías de otro país. Luego los revende a la empresa de un amigo por un precio que incluye un impuesto sobre el valor añadido (IVA).

Según la ley, usted debe enviar ese IVA a su gobierno. Pero en lugar de eso, usted y la empresa de su amigo simplemente desaparecen, se llevan el dinero del IVA y lo blanquean en otro lugar. Luego pueden invertir este dinero en hacer el mismo tipo de truco una y otra vez, hasta que usted y sus amigos sean extremadamente ricos. El fraude del carrusel de carbono de 2008 fue mucho más complicado que esto, pero se inspiró en esta idea básica.

En el pasado, este tipo de delincuencia utilizaba envíos de bienes reales, como teléfonos móviles o pantalones, trasladándose de un lugar a otro por carretera, tren o lo que fuera. Pero con el carbono, el delito se hizo mucho más fácil.

¿Por qué? Porque la mercancía carbono, como indicó Jutta Kill, no es más que un número imaginario que existe en un sistema computacional. Este número puede desplazarse a través de las fronteras nacionales y entre empresas en cualquier cantidad, cualquier número de veces, a rápida velocidad. En el fondo, con el mercado del carbono se crearon muchas oportunidades nuevas, mayores y más complicadas para el fraude del IVA. Se facilita el robo al Estado y a los ciudadanos en cantidades aún mayores de dinero que deberían haberse destinado a escuelas, carreteras, atención médica, etc. Delitos similares continúan existiendo en distintos lugares del mundo.

Hay que clarificar que todas las compensaciones de carbono son un fraude, incluso aquellas que dicen tener buenas intenciones. Es imposible proporcionar una mejor regulación a los mercados de carbono porque su origen, de principio a fin, es fraudulento.

Otro ejemplo de fraude por compensaciones toma lugar en Alemania. El sector de transportes tiene la obligación de reducir emisiones. En otras palabras, industrias petroleras tales como Shell, Total, BP, entre otras, en Alemania, tienen esta obligación. ¿Cómo funciona este perverso negocio?

Paso a paso, primero, las industrias petroleras le pagan a otra entidad para reducir emisiones que de otra forma no hubieran sido reducidas.

El fraude, en este caso es que, por años, proyectos que ni siquiera existían fueron verificados por auditores que eran reconocidos por este sistema alemán de mercado de créditos de carbono. Se estaban auditando proyectos inexistentes. Luego, a partir de proyectos inexistentes, las industrias petroleras estaban recibiendo créditos de carbono, de hecho estaban recibiendo dinero por estos créditos, y además incluían en el conteo de reducciones de gases invernaderos en el sector de transportes.

Entonces, es un círculo completo que beneficia a todas las industrias vinculadas a los mercados de carbono. Los auditores se benefician porque verifican y auditan proyectos inexistentes, quienes inventaron dichos proyectos (en este caso China) también se benefician con una remuneración fraudulenta.

Este es un claro ejemplo de lo abierto a la manipulación y fraude de todo este sistema de mercados de carbono, basado en reducciones y proyectos inexistentes. Incluso los proyectos que parecieran ser correctos, tales como los de conservación forestal, o los de inversión de pensiones en compensaciones de carbono, son fraudulentos.

El detalle recae en la modalidad del fraude; no todos funcionan exactamente igual. Algunos toman ventaja de los impuestos, otros toman ventajas de comunidades en necesidad de compensación monetaria, otros se aprovechan

de la corrupción intelectual y de empresas internacionales certificadoras tales como Verra.

No se puede validar una historia de lo que hubiera pasado sin un proyecto de carbono, convirtiendo esta historia en números y generando ganancias. Esta historia tiene ciertos estándares, y solo requiere de un auditor externo la apruebe para obtener créditos de carbono de una manera supuestamente legítima.

Este es el rol fundamental de empresas como Verra: continuar el fraude intelectual en red permitiendo así el funcionamiento de los mercados de carbono. Este tipo de empresas permiten la sobreestimación de la cantidad de reducción de emisiones de carbono, lo cual ha generado escándalos mediáticos últimamente.

Comercio de carbono sin fronteras: desde el sistema financiero internacional a la digitalización del capital

El comercio internacional de carbono se convirtió en política mundial con el Protocolo de Kioto (1997) Su fundamento fue claramente establecido cinco años antes por la declaración de George Bush en donde se dice que “el estilo de vida de Estados Unidos no es negociable,” esto quiere decir que el uso de combustibles fósiles debe continuar.

Como señala Lohmann, esta “no negociabilidad” de la quema continua de combustibles fósiles tiene su origen en la dependencia del propio capitalismo industrial de las máquinas alimentadas con combustibles fósiles para explotar la mano de obra y así acumular valor.

Con el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Protocolo de Kioto oficializó el impulso para crear compensaciones de carbono criminales que vemos hoy en día. Es por esta razón, como Jutta Kill comenta que “las corporaciones petroleras quieren que hablemos de carbono y clima sin hablar de petróleo y el punto de partida siempre fue que, sea cual sea el acuerdo internacional sobre el clima, no debe abordar el estilo de vida estadounidense”.

Esto nos lleva también al tema de las Instituciones Financieras Internacionales. El Banco Mundial, en particular, es un actor fundamental en el avance de las compensaciones de carbono a través de al menos tres fondos:

- (1) el llamado Fondo Prototipo de Carbono
- (2) la Asociación de Carbono Forestal, involucrándose así con la industria de compensación
- (3) y finalmente a través del Fondo de Biocarbono.

Este último es un agente clave para que consultores del Banco Mundial -y el BID en el caso de América Latina- tengan poder sobre países del Sur Global y los preparen para el desarrollo de la infraestructura de mercados de carbono liderados por el Estado.

Es decir, los mercados de carbono están siendo desarrollados por la banca multilateral y también por el Estado. Son mercados de carbono “regulados”. La intervención del Banco Mundial es rápida y coordinada, facilitando avance de la economía del carbono y favoreciendo al sector privado.

De esta forma, se propaga un capitalismo sin fronteras, de la mano de un sistema jurídico que lo respalda, en donde las mercancías ficticias comienzan a tomar protagonismo. La investigadora de Brasil, Camila Moreno comparte un caso que ejemplifica en la práctica la relación entre las políticas de Estado, los mercados de carbono, y el impacto comunitario en la Amazonia brasileña. Recientemente, en el estado de Amazonas la fiscalía hizo una recomendación de suspender las operaciones y contratos para iniciativas iniciadas y/o finalizadas de créditos de carbono de proyectos de REDD, con o sin regularización territorial definitiva.

Este caso es histórico ya que pone en perspectiva el capitalismo de frontera en el contexto de un boom de las mercancías ficticias a nivel global. Es esa acelerada transición, o transformación digital, ese horizonte de descarbonización al 2050, que pone como condición para descarbonizar el planeta el desarrollo de una “economía verde” que necesita urgentemente de la digitalización las sociedades.

Esto tiene un aporte energético masivo así como una electrificación brutal para alimentar este sistema, como los centros de datos. En este ámbito podemos hablar incluso de los criptoactivos, de los cuales los créditos de carbono son parte.

El medio digital crea condiciones que facilitan lavados de dinero y tiene como catalizadores una enorme descentralización que es vendida como una superación de órdenes jerárquicas, es decir sin bancos centrales, con las supuestas ventajas de un capital sin fronteras, y la transnacionalidad que es la base de los créditos de carbono. Si la sociedad se digitaliza y se virtualiza, el crimen también lo hará. Sin embargo, todas las moléculas de carbono negociadas en forma de títulos en estos mercados y en estos circuitos está anclada a un territorio, a una biodiversidad, a una tierra, a una soberanía de alguien que está siendo expropiada.

Despojo de tierras: narcotráfico, incendios, cambio climático y el mercado del carbono

Camila Moreno nos recuerda que este año hubo devastadores incendios que afectaron a gran parte de la región de Sudamérica incluyendo regiones de Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, entre otros.

En Brasil al menos 11.5 millones de hectáreas se han quemado desde el principio del 2024; específicamente en la Amazonía son 5.4 millones^[2]. Una de las causas de estos incendios es el cambio climático en sí mismo, con la sequía, con todo el cambio de régimen de lluvias, pero sobre todo con lo relacionado con monocultivos como el de la soya, la caña de azúcar, pero también de eucaliptos, que son nuevos ecosistemas completamente artificiales, impactando la humedad, sin biodiversidad o sin características fundamentales de lo que sería un ecosistema natural.

Otra de las causas de los incendios en la región tiene que ver con la cuestión criminal. Es decir, en Brasil es claro que son incendios coordinados y simultáneos. La narrativa del gobierno es que son incendios criminales y que es muy importante distinguir entre lo que son áreas públicas, como parques nacionales, unidades de conservación, y sitios donde el gobierno sí tiene que actuar. ¿Quién tiene la capacidad de enfrentar estos incendios? ¿Cuál es la infraestructura que se necesita?

Frente a la incapacidad de entidades públicas para efectivamente combatir los incendios, toman protagonismo los llamados servicios climáticos tales como las alertas tempranas (early warning systems en inglés), los seguros y otros servicios de seguridad privada. Lamentablemente, lo que ocurre con la masificación de incendios descontrolados es la apertura de áreas para especulaciones, para el acaparamiento de tierras y para el negocio de la restauración forestal.

La brecha entre la economía de la conservación de la biodiversidad y la economía criminal es muy estrecha. Por ejemplo, el Primer Comando de la Capital, una de las grandes bandas criminales de Brasil, ya está presente en aproximadamente un 60% de los territorios de la Amazonía brasileña. Esto impacta directamente a la población del lugar, quienes bajo los controles de las facciones criminales, con minería ilegal, con tráfico de drogas, pero donde también los esquemas de crédito de carbono empiezan a entrar en el flujo metabólico de nuevas economías que llegan a la región.

Andrea Echeverri, socióloga de la Coalición Mundial por los Bosques (GFC) sostiene que las dinámicas de dominación patriarcal, colonialista y capitalista afectan a comunidades empobrecidas que se ven forzadas a participar en economías que a menudo no comprenden; denuncia que estos mercados, lejos de ofrecer soluciones concretas a la crisis climática, perpetúan injusticias estructurales y benefician a un pequeño grupo de actores poderosos, al mismo tiempo que las comunidades empobrecidas pierden el control de sus territorios y cambian drásticamente las dinámicas que han permitido cuidarlos.

La explotación de sus tierras a través de proyectos REDD+ y la plantación de monocultivos forestales han transformado drásticamente las relaciones bioculturales y comunitarias.

Con referencia a los crímenes ambientales, Echeverri destaca que estos comprometen no solo el presente, sino también el futuro de todas las formas de vida. Critica la reducción de la crisis ambiental a moléculas de dióxido de carbono puesto que limita a una mínima expresión la respuesta a una encrucijada civilizatoria, y mide las relaciones sociales y ecológicas multiescalares con un único indicador. Esta forma de ver el problema se abordan las injusticias y causas estructurales que la han propiciado. Los proyectos REDD+ y otros de bonos de carbono como monocultivos forestales dependen de condiciones que degradan el tejido social y que enmascaran la culpa de grandes contaminadores, convirtiendo la relación de las comunidades con su entorno en una transacción monetaria.

En el contexto colombiano, que ha experimentado una reconfiguración del conflicto armado tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2017, a las tensiones inherentes a REDD+ y otros proyectos de bonos de carbono, se suman riesgos de extorsión por parte de grupos armados ilegales para captar recursos con “nuevas economías como los bonos de carbono”, según ha expresado la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 007-24, relacionada con riesgos a defensores y defensoras ambientales.

Este documento, centrado en la Amazonía colombiana, destaca repertorios de violencia y formas de control territorial y social por parte de grupos armados delincuenciales los cuales, al no manifestarse siempre con homicidios, suelen ser invisibilizados.

Así, amenazas, coacción, interferencia violenta en los procesos organizativos y comunitarios, desplazamientos, afectaciones a los gobierno propios y a la autodeterminación, son relacionadas con el Escenario de Riesgo 8, proyectos REDD+, según el Ministerio Público. Para algunas autoridades indígenas, son los actores armados ilegales quienes controlan el acceso a las personas que promueven los mercados de carbono a los territorios, y resulta claro cuándo una empresa cuenta o no con un apoyo armado. La Defensoría del Pueblo encontró en 2023, una presunta manifestación a favor de los bonos de carbono de la facción disidente (de las FARC EP) Frente Primero, con miras a obtener contribuciones económicas forzadas.

Echeverri pone de relieve otra dimensión ilegal de estos mercados de carbono al señalar que empresas sin registro en Colombia están negociando contratos en extensas áreas, lo que intensifica la explotación territorial, y resultan en una nueva analogía con otras economías criminales como el narcotráfico, donde las comunidades representan el eslabón más débil de la cadena.

Con los bonos de carbono, y los proyectos REDD+, son las comunidades in situ quienes sufren las consecuencias, no solamente de las actividades per se, sino de las medidas gubernamentales, en ocasiones asociadas a la securitización ambiental, que han llevado a presión a representantes comunitarios, en el caso por ejemplo de la operación Artemisa contra la deforestación, en el gobierno anterior.

Esta situación se agrava por la opacidad y falta de información en los contratos, así como la violencia epistémica, espiritual y de género que sufren las comunidades, que no solo enfrentan la imposición de condiciones asimétricas (Como contratos de 100 años con el pueblo indígena de reciente contacto, Nukak Makul) sino que a menudo son excluidas de las decisiones sobre sus territorios. La pregunta persiste: ¿para quién se está conservando? Echeverri insiste en que la conservación o el cuidado, debe servir a todas las formas de vida, y no ser un simple instrumento para blanquear la imagen de los multimillonarios y las economías ilegales.

Por último, Echeverri enfatiza la necesidad de desafiar la narrativa predominante de conservación ambiental, que no rinde cuentas a los territorios y comunidades que la sustentan. Para avanzar hacia un futuro más justo y diverso, es crucial reconocer las responsabilidades comunes pero diferenciadas en la crisis climática y ambiental. Ella advierte que el primer delito de esta economía de servicios ambientales es hipotecar el futuro, y que es vital no normalizar estas prácticas que, en lugar de contribuir a la justicia social y ambiental, perpetúan un ciclo de explotación y deterioro.

Este llamado a la acción se hace aún más pertinente ante los próximos encuentros internacionales sobre biodiversidad y cambio climático, donde la diáspora de la voz comunitaria debe

ser un elemento central en la conversación sobre el cuidado y el futuro del planeta.

Andrea Echeverri enfatiza en que lo primero es entender que el primer delito de esta economía de los servicios ambientales y del carbono es hipotecar el futuro. Los servicios ambientales, los servicios de compensaciones de carbono, de las líneas de base y adicionalidades, etc. son un invento muy reciente. No hay que normalizarlos.

La descarbonización, financiarización y digitalización funcionan los tres en conjunto, y dependen el uno del otro, siendo el carbono la molécula al centro del todo.

Contra eso, Camila Moreno dice que la manera más importante de resistir es afirmar que la historia está embarazada de futuros, futuros posibles, otros mundos posibles....!



NOTAS

El evento formó parte de los Diálogos Ecologistas 2024 sobre "Las otras economías criminales" que incluyeron también webinarios sobre endeudamiento y libre comercio. <https://www.accionecologica.org/dialogos-ecologistas-2024-las-otras-economias-criminales/>

(1) Habersang, Anja. (2024). Tackling terricide, not (only) ecocide: further exploring the nexus between social-ecological destruction. Globalizations. 1-19. 10.1080/14747731.2024.2400002.

(2) <https://brasil.mapbiomas.org/en/2024/12/16/area-queimada-no-brasil-ate-novembro-quase-dobra-em-relacao-a-2023-e-e-recorde-nos-ultimos-seis-anos/>

Más información:

<https://www.accionecologica.org/dialogos-ecologistas-2024-las-otras-economias-criminales/>